EXPEDIENTE No.: *****
QUEJOSO: N1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No.
12/2013
AUTORIDAD
DESTINATARIA: H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACÁN, SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 2 de abril de 2013

LIC. MOISÉS AARÓN RIVAS LOAIZA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CULIACÁN, SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis; 4º Bis B, fracciones IV y VIII; 4º Bis C, fracciones I, II, III, IV, V y VII y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interior, dio inicio a la investigación número *****, derivado del oficio número *****, recibido por parte de la C. Directora del Cuerpo de Defensores de Oficio de Gobierno del Estado, a través del cual remitió informe suscrito por la Defensora de Oficio adscrita a la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde hizo del conocimiento que brindó el servicio de defensa pública al señor N1, quien al rendir su declaración ministerial expresó haber sido golpeado por los agentes preventivos que llevaron a cabo su detención.

Con motivo de lo anterior, este Organismo Estatal se constituyó en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad y recibió escrito de queja por parte del señor N1, a través del cual hizo valer actos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por los elementos que llevaron a cabo su detención.

Hechos que fueron calificados como violatorios de derechos humanos y atribuidos a personal de la entonces Dirección de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, quien por tratarse de una autoridad del orden local, la cual ejerce un poder público, esta Comisión declara su competencia para conocer y resolver sobre los siguientes:

I. HECHOS

En su escrito de queja el hoy agraviado refirió que el día 27 de noviembre de 2011, aproximadamente a las 17:00 horas, al encontrarse en el interior de una farmacia de la colonia ***** de esta ciudad de Culiacán, un menor de edad que lo acompañaba intentó asaltar la farmacia con un arma de fuego y en ese momento llegaron dos elementos policiacos vestidos de civil y le quitaron el arma que portaba dicho menor y a él le propinaron un cachazo en la cabeza provocándole que se desmayara y al despertar lo estaban golpeando con patadas en todo su cuerpo.

Dicha queja fue calificada como presuntamente transgresora de derechos humanos, razón por la cual en los términos de lo que dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inició la investigación respectiva.

La misma quedó registrada al interior de este organismo bajo el expediente número *****.

El pasado 7 de enero del presente año, esta CEDH notificó a usted, en su carácter de Presidente Municipal de Culiacán, el Acuerdo de Conciliación número 18/2012.

En dicho Acuerdo de Conciliación se contienen, de manera primordial, las circunstancias que de forma concisa refiere este órgano de control constitucional a fin de ser identificadas por la autoridad señalada como responsable de violación a derechos humanos, para que en una actitud conciliatoria resuelva al respecto.

Los puntos resolutivos de dicho Acuerdo fueron los siguientes:

“ACUERDO DE CONCILIACIÓN

“PRIMERO. Instruya a quien corresponda para que al considerar los actos que motivaron la presente investigación así como los razonamientos expuestos por esta Comisión Estatal, se inicie procedimiento administrativo en contra de los CC. N2 y N3, adscritos a la actual Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva en Culiacán, para que de resultar procedente y acreditada su responsabilidad, se impongan las sanciones correspondientes con motivo de las acciones u omisiones incurridas y expresadas en la presente resolución.

SEGUNDO. Gire las instrucciones necesarias para que se capacite y evalúe periódicamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en seguir los principios y lineamientos en tópicos como el uso de la fuerza, incluidas las técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, comportamiento de multitudes, solución no violenta de conflictos medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, manejo de estrés; y se impartan cursos y capacitaciones de derecho penal, administrativo y en materia de Derechos Humanos.”

Por la naturaleza de dicho acuerdo conciliatorio, a la autoridad destinataria se le conmina a atender tal circunstancia eminentemente conciliatoria, pero a la vez se le apercibe que en dado caso de negativa a la aceptación del referido Acuerdo se procederá a emitir la recomendación correspondiente.

El apercibimiento respectivo en el caso que nos ocupa fue el siguiente:

“De no aceptarse el Acuerdo de Conciliación y durante los cinco días hábiles siguientes no se cumple totalmente con lo estipulado en el mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes el expediente del caso se reabrirá y determinarían las acciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De aceptarse dicho Acuerdo, la consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación correspondiente, tal y como lo establece el numeral 88 del citado ordenamiento legal.

Además, en caso de no aceptación del presente Acuerdo, se le requiere para que motive y fundamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por este organismo estatal carecen de sustento, adolecen de congruencia o por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.”

A las 12:25 horas del pasado 11 de enero del presente año, en esta CEDH recibimos documento suscrito por usted en su carácter de Presidente Municipal de Culiacán, fechado el día 10 de enero de 2013, del cual hace una serie de

señalamientos respecto al Acuerdo de Conciliación emitido por este Organismo Estatal, concluyendo al final de su oficio lo siguiente:

“Por lo ampliamente expuesto, se considera que el personal integrante de la Dirección de Policía Municipal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Culiacán, en los hechos que nos ocupan, actuó observando la normatividad que los regula, por consiguiente se le informa que no se acepta el acuerdo conciliación 18/2012

Se informa que los policías adscritos a la Dirección de Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Culiacán, cuentan con instrucciones precisas para efecto de que en el desempeño de sus funciones actúen dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, así como el resto de los ordenamiento jurídicos, tanto nacional, estatal y municipal aplicables.

De igual manera, se señala que los policías de referencia cuentan con la indicación superior de tratar en todo momento con atención y respeto a toda persona física, protegiendo los derechos y dignidad humana, incluyendo desde luego a los que hayan cometido un ilícito o infracción profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.”

Como se desprende de dicho documento y en virtud de que es omiso en responder, atender y garantizar los derechos humanos identificados como violados así como cada uno de los puntos señalados en el Acuerdo respectivo y con base en las atribuciones legales correspondientes, se considera no aceptado el Acuerdo de Conciliación, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución en forma de Recomendación.

En cuanto los antecedentes del caso que son plenamente de su conocimiento como Presidente Municipal de Culiacán, máxima autoridad individual de dicha institución de seguridad pública, se le ratifica que la causa correspondiente dio inicio con fecha 1º de diciembre de 2011 en que se recibió oficio por parte de la C. Directora del Cuerpo de Defensores de Oficio de Gobierno del Estado, a través del cual hizo del conocimiento que personal adscrito a dicha Dirección brindó el servicio de defensa pública al señor N1, quien al rendir su declaración ministerial ante la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad expresó haber sido golpeado por los agentes preventivos que llevaron a cabo su detención.

Para los efectos de la investigación correspondiente, la cual consiste en identificar si elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva

de Culiacán incurrieron en violaciones a los derechos constitucionales del agraviado, se integró el expediente respectivo con las siguientes:

II. EVIDENCIAS

1. Con oficio número ***** de fecha 13 de noviembre de 2011, se notificó al señor N1 el registro de la queja.

2. El 13 de diciembre de 2011, mediante oficio número *****, se solicitó al entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Culiacán el informe de ley correspondiente.

3. Con oficio número ***** de fecha 13 de diciembre de 2011, se solicitó informe de colaboración al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán.

4. Mediante oficio sin número de fecha 19 de diciembre de 2011, el Jefe del Departamento Enlace Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva de esta ciudad dio respuesta a la solicitud de informe de ley, dentro de la cual se destaca lo siguiente:

- Señaló que efectivamente elementos a cargo de esa corporación llevaron a cabo la detención de N1, el día 28 de noviembre de 2011, anexando copia fotostática certificada del parte informativo, así como dictamen médico de lesiones del hoy agraviado.
- Refirió que fue puesto a disposición en calidad de detenido ante la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada para Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad por la comisión del delito de robo con violencia a local comercial abierto al público mediante el uso de objeto (pistola de juguete) para intimidar a la víctima cometido por dos personas y demás que le resultara.
- Además señaló que hubo necesidad de utilizar la fuerza mínima necesaria en contra del hoy quejoso, toda vez que se abalanzó sobre la humanidad de unos de sus agentes aprehensores.
- Por lo anterior, destacó que N1 presentó lesiones físicas localizadas al momento de ser valorado por el médico de guardia de esa corporación.

5. Mediante oficio número ***** de fecha 19 de diciembre de 2011, se recibió respuesta por parte del Director del Centro de Ejecución de las

Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad, del cual se desprendió lo siguiente:

- Que efectivamente N1 se encontraba interno en dicho Centro.
- Señaló que se le practicó examen médico y que el mismo había presentado una herida contusa en cráneo de un centímetro aproximadamente, en región parietal izquierda.
- Remitió copia certificada del citado examen médico.

6. El día 16 de enero de 2012 se hizo constar que se recibió llamada telefónica por parte del señor N1 a fin de conocer el estado que guardaba la investigación de queja.

7. Mediante oficio número ***** de fecha 25 de abril de 2012, se solicitó informe en colaboración al agente del Ministerio Público del fuero común Especializado para Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad.

8. Mediante oficio número ***** de fecha 25 de abril de 2012, se solicitó informe en colaboración al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

9. Con fecha 30 de abril de 2012, se recibió oficio número *****, signado por el Encargado de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual rindió el informe solicitado.

10. Mediante oficio número ***** de fecha 15 de mayo de 2012, se requirió informe al C. agente del Ministerio Público del fuero común Especializado para Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad.

11. El día 24 de mayo de 2012, se recibió oficio número *****, signado por el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado para Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad a través del cual remitió el informe solicitado.

12. Con oficio número ***** de fecha 24 de agosto de 2012, se solicitó al agente segundo del Ministerio Público del fuero común de esta ciudad informe sobre los hechos puestos en conocimiento en el escrito de queja.

13. En fecha 31 de agosto de 2012, se recibió oficio número ***** por parte del agente segundo del Ministerio Público del fuero común de esta ciudad, a través del cual rindió el informe solicitado.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Se considera para los efectos de integración del expediente en que se actúa, que el hoy agraviado N1 señaló ante personal de esta Comisión Estatal violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio, relativos:

- Al Derecho a la Integridad (traducidos en malos tratos);
- Al Derecho a la Legalidad (en relación a la indebida prestación del servicio público);

Estos derechos humanos violados fueron acreditados por parte de esta CEDH una vez que se realizó el análisis lógico jurídico elaborado al conjunto de evidencias que integran el expediente *****, considerando que se contó con elementos suficientes para acreditar las violaciones a derechos humanos precisadas anteriormente en agravio del señor N1.

No obstante a ello, mediante oficio número ***** de fecha 10 de enero del presente año, signado por usted en su carácter de Presidente Municipal de Culiacán, hizo del conocimiento a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos que no aceptaba el Acuerdo de Conciliación número 18/2012, en razón de que consideraba que personal integrante de la actual Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Culiacán, en los hechos que nos ocupan, actuó observando la normatividad que los regula.

Asimismo, reiteró que los policías adscritos a la Dirección de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Culiacán contaban con instrucciones precisas para efecto de que en el desempeño de sus funciones actúen dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, así como el resto de los ordenamientos jurídicos, tanto nacional, estatal y municipal aplicables.

En esa tesitura desvirtúa las observaciones realizadas por este Organismo Estatal en cada uno de los derechos violentados por personal de ese Ayuntamiento a su cargo en agravio del señor N1.

Una vez que se realizó el estudio y análisis de sus motivos y fundamentos legales para no dar por aceptado el Acuerdo de Conciliación, esta CEDH Sinaloa procede a puntualizar cada uno de los derechos que se vieron vulnerados por personal de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva en Culiacán respecto a los señalamientos que viene objetando:

IV. OBSERVACIONES

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Integridad y seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Malos tratos

Al iniciar nuestro análisis se retoma lo señalado en el oficio número *****, a través del cual ese H. Ayuntamiento responde sobre la no aceptación del acuerdo conciliatorio propuesto por esta Comisión Estatal:

*“Del parte informativo ***** de fecha 28 de noviembre del 2011, suscrito por los CC. N2 y N3, elementos de la entonces denominada Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Culiacán; se desprende que los elementos en mención se encontraban realizando vigilancia preventiva en las afueras de la negociación denominada “*****”, ubicada en avenida ***** y calle ***** de la colonia *****, señalando estos que se percatan que dos individuos ingresaban al inmueble y cada uno de ellos se dirigieron a cada caja registradora donde estaban las empleadas, y uno de estos sacó de entre sus ropas una pistola, con la que amenazó directamente a las empleadas de esta negociación, manifestándoles “esto es un asalto dame todo el dinero...”, por lo que dichas empleadas ante el temor de sufrir una agresión en su integridad física o inclusive que fueran privadas de su vida al ser amenazadas con la pistola en comento, entregaron a este sujeto dinero que se encontraba en el interior de las cajas registradoras, el cual, N1, se echó a la bolsa del pantalón que vestía, a la vez los policías se dirigieron a este sujeto y su menor acompañante, indicándoles que eran policías, que no se movieran y se tiraran al suelo, a lo cual estos hicieron caso omiso, siendo en ese momento que la persona mayor de edad, de nombre N1, que portaba una pistola en sus manos, volteó hacia el agente N2 tratando de abalanzarse hacia él, enfrentándose a la fuerza pública oponiendo resistencia al arresto y por consiguiente suscitándose un forceje, logrando finalmente el policía en mención controlar a este individuo y quitarle la pistola que portaba.*

Versión que se corrobora con el dicho de las propias empleadas de la negociación de referencia, ya transcrito en líneas anteriores, quienes son víctimas directas de la amenaza que sufrieron por parte de N1, quien las intimidaba apuntándoles hacia su persona con una pistola en la mano; así como también, con la declaración del menor de edad que lo acompañaba de nombre M1, también antes transcrita, en la que éste señala que era N1,

quien portaba la pistola en la mano y con ella amenazaba a las cajeras de la negociación afectada.

Por consiguiente se advierte que el hoy quejoso N1, al momento de rendir su declaración lo hace de manera defensiva, y tratando de asumir un papel de víctima que en ningún momento le corresponde, pues del expediente de merito se advierte que él fue quien puso en riesgo la integridad de las empleadas de la negociación de referencia, al cometer un delito que lesiona el patrimonio económico del propietario de la misma, que además es considerado como grave conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penales vigente en nuestra entidad federativa, y aunado a ello, al momento de ser sorprendido por la autoridad municipal en flagrancia delictiva, se resistió al arresto provocando un forcejeo, pero del cumulo de probanzas que existen agregadas al expediente de referencia se advierte que la actuación policial fue en todo momento con apego al cumplimiento de su deber y las reglas establecidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”

Una vez observados sus argumentos tocante a la no aceptación del Acuerdo de Conciliación, es preciso señalar que el sustento más importante lo es el propio parte informativo de fecha 28 de noviembre de 2011, suscrito por los CC. N2 y N3, agentes de la policía municipal, los cuales mencionaron que al estar realizando vigilancia preventiva observaron a dos personas del sexo masculino que ingresaron al local comercial denominado “*****”, percatándose que uno de ellos sacaba de entre sus ropas un arma de fuego y le exigió el dinero a una de las empleadas que se encontraba en la caja registradora, por lo que rápidamente se dirigieron hacia los presuntos responsables identificándose como policías municipales procediendo a sacar sus armas de cargo con las medidas preventivas necesarias y ordenándoles que no se movieran y posteriormente que se tiraran al suelo, los cuales hicieron caso omiso, siendo en esos momentos que uno de ellos, el cual portaba el arma, trató de abalanzarse hacia uno de los elementos policiacos, “por lo que se dio un forcejeo logrando controlarlo y quitarle el arma de su mano y tirarlo al suelo”, el cual se identificó como N1.

De lo anterior se debe resaltar que efectivamente los elementos policiacos dejan asentado que hubo un forcejeo y logran controlar al señor N1; sin embargo, nunca se menciona en dicho parte informativo que con motivo de tal forzamiento tuvieron que hacer uso de la fuerza pública utilizando su arma de cargo para propinarle un cachazo en su cabeza y lograr someterlo.

En tal sentido es que se considera que los servidores públicos involucrados debieron ser precisos en plasmar en tal documento que con motivo de dicho

forcejeo el presunto responsable resultó lesionado en su cabeza, en virtud de que en el mismo parte informativo obra anexo el certificado médico de lesiones donde se describe que presentaba una herida contusa en la región temporo-parietal izquierda, ello en virtud de que el que lleven a cabo un forcejeo no necesariamente deben resultar lesionadas las personas sometidas.

Asimismo, se le reitera que esta CEDH Sinaloa ratifica que el derecho a la integridad física no es absoluto, esto es, que puede verse afectado de manera legal cuando una persona con su actuar se resiste al acato de una orden de autoridad, pone en peligro su vida o integridad física o la de otras personas y ante estas circunstancias se requiera el uso de la fuerza para controlar la situación.

Por ello, este Organismo Estatal no se opone al uso racional de la fuerza pública cuando ésta se torna necesaria e indispensable para someter a una persona en los supuestos autorizados por la norma y, como último recurso, cuando otros métodos posibles no hayan demostrado su eficacia.

Es por ello que los funcionarios durante la detención deben hacer un uso de la fuerza que sea estrictamente necesaria para el sometimiento de la persona, esto como una medida excepcional y como uno de los últimos recursos, cuando el sujeto a aprehender oponga resistencia y otras medidas no violentas y técnicas de persuasión que deben agotarse previamente cuando las circunstancias del caso lo permitan.

Es así que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en nuestro Estado están obligados a respetar el derecho humano de integridad y seguridad personal durante la aprehensión de cualquier persona a quien se atribuye alguna conducta delictiva.

Así las cosas, y en atención al caso que nos ocupa, el señor N1 denunció ante este Organismo Estatal que el día 27 de noviembre de 2011 fue detenido y golpeado en su integridad corporal por elementos de la entonces Dirección de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, cuando se encontraba en el interior de una farmacia en la colonia ***** de esta ciudad.

Al respecto, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos acreditó que el señor N1 fue objeto de malos tratos y golpes en su integridad corporal al momento de llevar a cabo su detención por parte de los CC. N2 y N3, elementos comisionados al operativo robo a comercio de la entonces Dirección de Seguridad Pública Municipal de Culiacán.

Dicha afirmación quedó acreditada mediante copia certificada de la declaración ministerial rendida por el señor N1 en fecha 29 de noviembre de 2011, ante el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado para Asuntos con Detenidos en Flagrancia en esta ciudad, esto toda vez que de la misma se desprende que éste manifestó haber recibido un cachazo en la cabeza, así como diversos golpes en diferentes partes de su cuerpo por parte de sus agentes aprehensores, además dicho representante social vía fe ministerial hizo constar que al declarar presentaba en la parte izquierda de la cabeza una venda quirúrgica, ya que había recibido atención médica, asimismo que presentaba diversas escoriaciones de diferentes dimensiones en la espalda.

Por lo que al momento de que le fuera concedido el uso de la voz a su defensor de oficio, lo cuestionó si era su deseo interponer formal denuncia y/o querrela en contra de los elementos que lo lesionaron al momento de su detención, manifestando en sentido afirmativo.

Aunado a esto, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado determinaron que el señor N1 presentaba herida producida por contusión de 1.5 centímetros de longitud, localizada en la región temporo-parietal izquierda, que afectaba sólo la piel, así como equimosis difusas, producidas por contusión dispersas en un área de 8 por 10 centímetros localizada en la región escapular izquierda, de color rojo vino.

Es importante señalar también que con fecha 6 de diciembre de 2011, personal de este Organismo Estatal dio fe de la integridad corporal del señor N1 en el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, observando que éste presentaba diversas lesiones en su superficie corporal procediendo a imprimir placas fotográficas agregándose a la presente investigación, dichas lesiones coinciden en tiempo y forma con la versión del hoy quejoso.

Así las cosas, no queda más que afirmar que quienes llevaron a cabo las lesiones en la superficie corporal del señor N1, fueron los elementos que llevaron a cabo su detención, además de que éstos aceptan que fueron ellos quienes realizaron tal detención y en la misma se dio un supuesto sometimiento.

Por tales motivos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera existen elementos de prueba suficientes para señalar a los CC. N2 y N3, elementos municipales de esta ciudad, responsables de violar en perjuicio del señor N1 su derecho humano de integridad y seguridad personal.

Asimismo, se reitera que del parte informativo rendido por los agentes que llevaron a cabo la detención del agraviado, se desprende que tuvieron que forcejear con éste para lograr someterlo, pero no describen si con motivo de ello tuvieron que golpearlo con sus armas de cargo y se pretende que este Organismo Estatal traduzca ello como valores entendidos en el sentido que el señor N1 presentó lesiones con motivo de tal forcejeo para lograr su detención.

Lo que resulta contradictorio cuando usted viene reconociendo que dichos elementos cuentan con instrucciones precisas para efecto de que en el desempeño de sus funciones actúen dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, así como el resto de los ordenamientos jurídicos, tanto nacional, estatal y municipal aplicables, razón por la cual se puede afirmar que dichos agentes no actuaron de forma proporcional a la circunstancia, haciendo caso omiso a la obligación de preservar la integridad del detenido que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública les impone en su artículo 40.

Dicho derecho humano se encuentra reconocido y protegido en los artículos 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales al respecto señalan lo siguiente:

“Artículo 19.

...Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 22.

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

Asimismo, dichos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley transgredieron instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los que destacan:

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:

“Artículo 16

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona...”.

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:

“Artículo 2

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumana o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Artículo 3

Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes...”

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

“Artículo I.

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Además de los ya referidos ordenamientos legales, los elementos de la policía municipal transgredieron diversas disposiciones de carácter federal dentro de las que destacan:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;

.....

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

.....

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;”

De igual manera dichos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley transgredieron diversa reglamentación de carácter local, dentro de las que encontramos:

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 1.

El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes.”

Artículo 73.

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución les señala.

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Las instituciones encargadas de la seguridad pública regirán su actuación por los principios de legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.”

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa:

“Artículo 31.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución Local.

.....

V. Abstenerse en todo momento de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como, amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente.

.....

XXXI. Utilizar la fuerza física en forma racional, oportuna y proporcional en el desempeño de sus funciones; y...

.....”

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la legalidad

HECHOS VIOLATORIOS ACREDITADOS: Prestación indebida del servicio público y omisiones en la elaboración del informe policial

Para abordar los presentes hechos violatorios acreditados por esta CEDH, transcribimos los apartados atinentes del informe número **** del H. Ayuntamiento de Culiacán, a través del cual da respuesta sobre la no aceptación del Acuerdo de Conciliación propuesto por esta CEDH en el caso que nos ocupa:

“En óbice de repetición de los razonamientos vertidos en el punto Primero, se señala que los elementos de policía municipal N2 y N3, al momento de

los hechos de referencia, se encontraban realizando funciones propias de su cargo como servidores de seguridad pública, conforme a las atribuciones ampliamente descritas en el párrafo segundo de la hoja uno del presente escrito, mismos que intervinieron en auxilio de quienes en ese momento eran afectadas de un robo violento y estaban siendo amenazadas con una pistola, con la que les apuntaban directamente hacia su superficie corporal, por lo que los elementos policiales únicamente lo que hicieron fue, cumplir con su función de proteger los bienes jurídicos de las personas, incluyendo la salud e integridad personal que en ese momento se encontraban infringiendo la norma penal, tan es así que primeramente les efectuaron un llamamiento preventivo para que se entregaran, pero éstos por el contrario decidieron enfrentarlos, derivándose de esto un forcejeo en el cual los policías utilizando la fuerza mínima necesaria lograron controlarlos; pero en ningún momento se excedieron en el uso de la fuerza, lo que se acredita con las declaraciones de las empleadas N4 y N5.

Atendiendo los razonamientos anteriormente vertidos, se considera que en ningún momento se violentó en perjuicio del quejoso el derecho de legalidad por parte de los CC. N2 y N3, policías adscritos a la Dirección de Policía Municipal Unidad Preventiva.”

En atención a lo anterior, es preciso señalar que este Organismo Estatal no cuestiona el actuar de los agentes preventivos en cuanto a sus atribuciones conferidas, sino que con motivo de éstas fueron omisos en precisar que al llevarse a cabo el forcejeo entre los presuntos responsables y ellos, tuvieron que hacer uso de la fuerza pública para lograr someterlos.

Ante ello, se pretende justificar su actuar con las declaraciones de las propias empleadas N4 y N5, pero al igual que el parte informativo, se abocaron a señalar que al entrar los policías a la negociación sometieron a los responsables del robo, dándose un forcejeo entre ellos para tratar de quitarle una pistola que portaba, logrando tirarlo al suelo.

Insistiéndose que con ese dicho se pretende justificar el actuar de los elementos policiacos en relación a que en ningún momento describen que tuvieron que golpear en su cabeza al hoy agraviado N1 para que éste pudiera ser sometido en razón de que se resistía a su detención, por lo que con esa omisión, por supuesto que se traduce como una indebida prestación del servicio público y en el hecho violatorio “omisiones en la elaboración del informe policial”.

Bajo este contexto, es preciso señalar que este Organismo Estatal en ningún momento se encuentra analizando el actuar del señor N1 en el sentido si es o

no responsable de la probable comisión de un delito, sino que nos corresponde analizar el actuar de los servidores públicos involucrados en la detención del hoy agraviado, ante presuntas violaciones a derechos humanos.

En virtud de ello, este tipo de violaciones a derechos humanos se vuelven prácticas rutinarias para los elementos policiacos que día con día tiene a cargo la tarea de realizar detenciones por las presuntas comisiones de ilícitos, razón por la cual no debe pasar desapercibido ese tipo de detalles en los informes policiales, que contrastan con las probanzas que existen para acreditar que efectivamente los presuntos responsables se conviertan posteriormente en víctimas de su actuar.

Que en un régimen constitucional como el nuestro, la valoración jurídica del proceder de un servidor público debe hacerse a partir de lo que la ley fundamental estatuya en cuanto a su competencia, análisis que debe ser complementado con lo que la legislación secundaria prevenga con relación a sus atribuciones, lo cual más adelante, en forma sucesiva, examinaremos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diferentes cuerpos normativos de la legislación secundaria que regulan el actuar de todo servidor público.

En el caso que nos ocupa, dichos hechos violatorios involucran a los CC. N2 y N3, adscritos a la actual Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, ya que como quedó asentado en la primera parte de la presente resolución, que al llevar a cabo la detención del señor N1 hicieron uso de la fuerza una vez que éste estuvo sometido logrando lesionarlo en diversas partes de su cuerpo, lo cual no fue debidamente plasmado en su informe policial rendido a la autoridad a quien se puso a disposición.

Por tal razón, el señor N1 al momento de rendir su declaración ministerial ante el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado para Asuntos con Detenidos en Flagrancia de esta ciudad, manifestó su deseo de denunciar a dichos elementos y por tal razón el agente social dio vista a la agencia segunda del Ministerio Público del fuero común de esta ciudad Culiacán, donde se inició la averiguación previa número ***** con fecha 26 de enero de 2012, en contra de los servidores públicos anteriormente señalados.

Con tales acciones y/u omisiones por parte de los funcionarios públicos señalados, indudablemente transgredieron lo dispuesto en los siguientes ordenamientos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos

fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba.”

Numerales de los que claramente se desprende que servidor público es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

De esa manera los funcionarios públicos señalados pasaron por alto tanto leyes estatales, federales e instrumentos internacionales, entre los que se encuentra el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de cuyo texto se destacan los artículos siguientes:

“Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa:

“Artículo 15.- Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:

.....

XXVII. Proporcionar en forma oportuna la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

.....

Artículo 34.- Se considerarán como faltas administrativas graves:

.....

III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones aplicables;

.....”

Ordenamientos de los que se desprende la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos y, en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado.

Por tales motivos, este organismo considera pertinente se inicie procedimiento administrativo en contra de los CC. N2 y N3, agentes de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, por parte del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento Municipal de Culiacán y se aporten los elementos que den lugar al esclarecimiento de los hechos y en su oportunidad se imponga la sanción respectiva.

Por lo que con su actitud omisa o elusiva, avala tales violaciones a derechos humanos; por lo que este organismo queda facultado a emitir de manera inmediata la correspondiente Recomendación, a través de la cual se exija la determinación de responsabilidades y la reparación del daño correspondiente.

El camino que le ha tocado transitar a los organismos públicos de protección y control de los derechos humanos, en la defensa y difusión de éstos, no ha sido fácil ni exento de limitaciones, la falta de información y la no comprensión clara de la naturaleza y misión de estos organismos ha repercutido en lo expresado.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como el artículo 4º Bis

segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Presidente Municipal de Culiacán, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que al considerar los actos que motivaron la presente investigación así como los razonamientos expuestos por esta Comisión Estatal, se inicie procedimiento administrativo en contra de los CC. N2 y N3, adscritos a la actual Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, para que de resultar procedente y acreditada su responsabilidad, se impongan las sanciones correspondientes con motivo de las acciones u omisiones incurridas y expresadas en la presente resolución.

SEGUNDA. Gire las instrucciones necesarias para que se capacite y evalúe periódicamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en seguir los principios y lineamientos en tópicos como el uso de la fuerza, incluidas las de técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, comportamiento de multitudes, solución no violenta de conflictos, medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, manejo de estrés; y se impartan cursos y capacitaciones de derecho penal, administrativo y en materia de Derechos Humanos.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

V. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

Notifíquese al licenciado Moisés Aarón Rivas Loaiza, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 12/2013, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor

público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese al señor N1, en su calidad de quejoso, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO